

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de octubre de 2018.

Por recibido.

Téngase por asumida la intervención complementaria de la Asesora Pública Tutelar en resguardo de los derechos de los niños F.P.V, B.M.V, A.P.V y S.D.V. en los términos del art. 53 de la ley n° 1903 y del art. 103 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación y sin perjuicio de la representación ejercida por su madre.

Ténganse presentes el dictamen que antecede y las autorizaciones conferidas.

En atención a lo solicitado por la parte actora a fs. 55 punto XII y las constancias obrantes en la presente causa, resérvense las presentes actuaciones y hágase saber que las mismas sólo podrán ser revisadas por las partes, sus abogados, apoderados, representantes legales, los peritos designados en el juicio y las personas autorizadas por cualquiera de ellos (art. 1.14 y 1.13.1 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial Resolución CMCABA 152/1999).

**Y VISTO;**

Estas actuaciones para resolver la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio de las que, **RESULTA;**

**I.A** fs. 1/56 se presenta M. P. T., por derecho propio y en representación de sus hijo/as menores de edad F.P.V., B.M.V., A.P.V y S.D.V. e inicia acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (en adelante, IVC) a fin de que les provea una solución habitacional permanente que garantice condiciones dignas, seguras y adecuadas de habitabilidad, acorde a los estándares de acceso a la vivienda digna previstos en el bloque de constitucionalidad federal y local y en resguardo de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la dignidad inherente a todo ser humano.

Señala que su petición se funda en la omisión ilegal y arbitraria de la Administración local de ofrecer e implementar medidas razonables para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna de su grupo familiar.

Solicita como medida cautelar se ordene al GCBA la inmediata incorporación del grupo familiar, de forma urgente, a los programas locales creados para abordar situaciones de emergencia habitacional, que implique un auxilio cierto y suficiente para acceder a un alojamiento que reúna condiciones dignas de habitabilidad. Requiere que en caso de que la medida dispuesta consista en un subsidio, el monto sea suficiente para cubrir los gastos de un alquiler adecuado al grupo familiar. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 5° y 6° del decreto n° 690/06 y sus modificatorios en cuanto establecen limitaciones temporales y económicas y en cuanto se erigen en un impedimento del goce real y efectivo del derecho a la vivienda.

Señala que se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad social y de emergencia habitacional, en razón de la inminente y cierta posibilidad de desalojo en virtud de la resolución dictada en fecha 22/09/2017 en el marco de la causa “M. L. M. c/ A., J. A. y otros s/ Desalojo por vencimiento de contrato”, expediente n° 16704/2017, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 53.

En cuanto a los antecedentes fácticos indica que atravesó violencia de género estructural en los últimos 26 años y que padece una severa situación de salud ya que sufre dos enfermedades autoinmunes, las cuales se relacionan directamente con la violencia a la cual fue sometida, que le impiden desenvolverse en el mercado formal laboral.

Expone que solicitó asistencia al GCBA pero no recibió apoyo por los organismos estatales con miras a la recomposición de un proyecto de vida y la reconstrucción de su autonomía como mujer y madre.

Alega que las situaciones de violencia le han dejado lesiones psíquicas y secuelas físicas gravísimas e irreversibles; que el primer episodio que sufrió fue a los 19 años y el último fue la violencia física, sexual, económica que dio lugar a la inminente situación de calle con sus hijos. Agrega que entre uno y otro sufrió -sin solución de continuidad- situaciones de violencia física, sexual y psicológica que incluyeron palizas, vejaciones, insultos, abusos sexuales, violaciones, acosos, intimidaciones, amenazas, burlas, coacciones, privaciones arbitrarias de su libertad, menosprecios, discriminaciones, manipulaciones y torturas psicológicas. Manifiesta que a raíz de ello abandonó definitivamente sus estudios, su trabajo y cualquier proyecto de vida autónomo.

Expone, en cuanto a su salud, que padece Lupus y Síndrome de Sjorgren, enfermedades de carácter irreversible, por las que se encuentra bajo tratamiento médico permanente, y que se manifestó inicialmente en el período en que estuvo sometida a una relación violenta, la que se expuso en la prohibición de que realizara los estudios médicos y los tratamientos para mitigar los síntomas de las enfermedades mientras convivió con el hombre violento. Alega la persistente amenaza de sufrir actos de violencia.

Señala que tiene 45 años, que es madre de cinco hijos -cuatro de los cuales son menores de edad y dos sufren problemas de salud-, que padece dos enfermedades discapacitantes, no tiene empleo, que su hogar se encuentra bajo la línea de pobreza/indigencia y que esta a punto de quedar en situación de calle. Agrega la ausencia de lazos de contención sociofamiliares.

Aduce que en la vivienda que actualmente reside con sus cuatro hijos pesa una sentencia de desalojo por falta de pago, inmueble que fue alquilado por ella y por su anterior pareja -Sr. J. A. K.- y que la falta de pago del alquiler del inmueble se relaciona con el deterioro de su situación económica luego de que el mismo debió abandonar el hogar a raíz de su exclusión por orden judicial de fecha 8 de febrero de 2017, en virtud de las lesiones físicas que le causó y el abuso sexual que le infringió, por el cual se encuentra procesado penalmente. Asimismo indica que el alquiler que abonaban era de seis mil pesos, abonado tres mil pesos cada uno. Con vinculación a ello indica que “[c]omo resultado de la exclusión del hogar del Sr. A. y de la falta de medidas de asistencia y apoyo para superar la violencia que padecí, la condición económica de mi hogar declinó abruptamente e ingresaron en el grupo de personas debajo de la línea de pobreza/ indigencia.// En consecuencia, e inmediatamente después de la presentación

de la denuncia por violencia y del dictado del orden judicial de exclusión del hogar, fue iniciada una acción de desalojo del inmueble en donde resido. Con fecha 22 de septiembre de 2017 se dictó cautelar que ordenó la desocupación inmediata en contra de nuestro grupo familiar y el 28 de febrero de 2018 fui notificada de dicha resolución”. Agrega que actualmente el expediente se encuentra en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para resolver el recurso de apelación concedido, pero que existen posibilidades ciertas que se ejecute la sentencia de desalojo en forma inminente y se coloque a su familia en un estado de desprotección e indefensión absoluta. Señala que en el marco de dicho proceso se libraron oficios al IVC, al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata del GCBA para que brinden una solución a nuestro problema habitacional pero que sus intervenciones han sido infructíferas.

Indica que ante la posibilidad concreta de quedarse en situación de calle con su familia, el 29 de junio del presente, acudió al Ministerio de Desarrollo Social de la CABA con el objeto de solicitarle asistencia al gobierno para encontrar una alternativa habitacional en forma urgente, solicitud que reiteró la Defensoría del Pueblo de la CABA con fechas 24/07/2018 y 06/08/2018, sin haber obtenido respuesta alguna a la fecha de la interposición de la demanda.

Relata situaciones de violencia causados por el padre de sus hijos entre las cuales se encuentran violencia física, psicológica, sexual, con amenazas de muerte, la incitación a suicidarse en varias oportunidades, fue sometida a relaciones sexuales no consentidas, “lavar, cocinar y hacer todo como si no estuviera en trabajo de parto” y le impidió adoptar medidas para el tratamiento de la enfermedad de Lupus.

Señala que dejó de estudiar su carrera y pasó a ser el sostén de la familia para que el Sr. V. pudiera estudiar y recibirse de médico y que el hostigamiento persistió luego de su separación, el que fue perpetuado también por los familiares de éste.

Expone que efectuó diversas denuncias y cita las causas n° 767/2017 “T. M. P. c/ V. N. A. s/ Denuncia por violencia familiar” Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25, causa criminal n° 43.058/17/19 caratulada “V. N. A. s/ lesiones” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, secretaría n° 169, “T. M. P. c/ V. N. A. s/ actas de exposición/denuncia” Expediente n° 65342 Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, IPP N° 13-00-031617-13 “V. N. A. s/ Amenazas; lesiones leves. Dte T. M. P. ”, Sumario n° 1892 UFI n° 10 de Quilmes, “T. M. P. c/ V. N. A. s/ Protección contra la violencia familiar” Tribunal de Familia N° 1 de Quilmes. Señala que en esta última causa se dictó sentencia en la cual se resolvió prohibir a los Sres. N. A. V. y Aa. V. -su padre- el acercamiento a una distancia menor a 500 metros a su persona y su domicilio, así como el hostigamiento sobre su persona en forma personal o por el empleo de diversos medios de comunicación.

Agrega que en las actuaciones “T. M. P. c/ V. N. A. s/ actas de exposición/denuncia” Expediente n° 65342 Juzgado de Familia N° 2 del Departamento

Judicial de Quilmes se resolvió prohibir por el término de seis meses al Sr V. N. A., P. A. V., G. G. y M. T. a practicar cualquier tipo de perturbación, intimidación, hostigamiento y la ejecución de cualquier acto o hecho de violencia de carácter físico y/o verbal y/o psicológico sobre su persona, sus hijos y sus padres como, asimismo, fijar por el mismo período un perímetro de 300 metros alrededor de su domicilio, dentro del cual se les prohibió ingresar, acceder, circular o permanecer.

Expone que en la causa “*T. M. P. c/ V. N. A. s/ Denuncia por violencia familiar*” con fecha 18/01/2017 se estableció una prohibición de acercamiento de N. A. V. a menos de 300 metros a la redonda del domicilio de la calle Av Olivera 449 del Barrio de Parque Avellaneda de esta Ciudad, asimismo, con respecto al amparista y los niños en cualquier lugar en el que se encuentren por el plazo de 30 días, la cual fue sucesivas veces prorrogada.

Agrega que, luego formó pareja con el Sr. A. pero que luego de un tiempo se vio sorprendida por el comportamiento agresivo del mismo hacia su persona. Señala que denunció los hechos de violencia y que en el marco de las actuaciones “*T. M. P. c/ A., K. J. A. s/denuncia por violencia familiar*” expediente n° 4144/2017 el juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 decreto una prohibición de acercamiento que se prorrogó sin límite temporal, con respecto a ella y a sus hijos. Manifiesta que en paralelo inició la causa n° 5912 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal, caratulada A., J. A. s/ abuso sexual agravado por el vínculo con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el vínculo, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, que se basa el informe médico la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN que da cuenta las lesiones presentadas.

Resalta que fue víctima sistemática y continua de violencia de género, que en un momento dado fue perturbada en forma prácticamente sistemática por parte de dos hombres, por lo cual le resulta imposible retomar el proyecto de vida autónomo en el corto plazo; que tuvo que hacer un largo recorrido entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en búsqueda de asistencia para poder asegurar sus derechos y resguardarse de las nuevas manifestaciones de violencia hacia ella y hacia sus hijos. Agrega que actualmente recibe asistencia psicológica y que si bien recibe actualmente prestaciones de programas destinados al mantenimiento de su familia, las diferentes aristas de la asistencia que necesita en virtud de ser víctima de grave violencia de género -médica, psicológica, habitacional, laboral y educativa- se encuentran ampliamente insatisfechas.

Con respecto a su sistema de salud señala que padece Lupus Eritematoso Sistémico diagnosticado y Síndrome de Sjogren y que si bien no ha podido tramitar el certificado de discapacidad, lo cierto es que los síntomas que las mismas le acarrearán han limitado sus posibilidades laborales. Manifiesta que debe realizar diferentes tipos de tratamientos a lo largo de su vida, acorde a la cronicidad de la enfermedad, que pueden cursar con brotes y reactivaciones, los cuales profundizan por un tiempo determinado los síntomas y existe riesgo para la vida.

Señala que sus hijos no poseen obra social, que se atienden en el CESAC N° 13; que sus hijas mellizas poseen disminución visual y que salvo S.D.V el grupo familiar se encuentra bajo tratamiento psicológico.

Indica que es una mujer de 45 años, argentina, con estudios terciarios completos con el título de visitadora médica, madre de cinco hijos, que con el mayor -fruto de su primera pareja- con quien se desvinculó cuando tenía 7 meses de vida, que se encuentra desempleada y que su único ingreso proviene de la venta informal.

Agrega que los niño/as concurren a la escuela, que A.P.V, B.M.V y F.P.V concurren a la Orquesta Infantil y Juvenil de Parque Avellaneda así como también realizan talleres de circo y expresión corporal en el Pasaje de La Selva –Centro Cultural vinculado al GCABA.

Expone que recibe una prestación alimentaria, por medio del programa “Ciudadanía Porteña –Con todo Derecho”, por la cual le depositan seis mil cuatrocientos pesos aproximadamente; que recibe cuatro mil cuatrocientos pesos como parte del Programa Ellas Hacen y que el padre de sus hijo/as le deposita una cuota alimentaria pero no lo hace en forma constante, por lo cual radicó una denuncia de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar caratulada “*V. N. A. s/ infr. Arts. 1 ley 13.944*” sumario n° 9762 causa n° 14280/17, Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 3. Indica que el monto total que percibe es insuficiente a los fines de costear un alojamiento adecuado que garantice estándares mínimos de habitabilidad como así también las demás necesidades del grupo familiar.

Señala que en fecha 29 de junio concurrió a la Unidad de Contención Temprana la cual depende de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del GCBA con el fin de solicitar el subsidio habitacional que otorga el Programa Atención para Familias en Situación de Calle y/o el que lo complementa, oportunidad que fue entrevistada por una profesional del programa, agregando que presentó una nota explicativa de su situación personal, la cual fue registrada bajo el n° 2018.18264650-MGEYA-DGDAY. Sostiene que, con fecha 24 de julio del presente la Defensoría del Pueblo de la CABA en el marco de las actuaciones n° 25628/17 presentó un pronto despacho, el que fue reiterado con fecha 06 de agosto del presente, todo lo cual se encuentra sin respuesta.

Funda en derecho su pretensión, presta caución juratoria, ofrece prueba, hace reserva constitucional y de acudir oportunamente a la jurisdicción supranacional.

**II.** A fs. 59/269/vta. obra prueba documental.

**III.** A fs. 271 se confiere traslado de la demanda y se confiere vista al Ministerio Público Tutelar.

**IV.** A fs. 274/278 dictamina el Ministerio Público Tutelar.

**V.** En primer lugar corresponde verificar si se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la medida cautelar peticionada. Al respecto, cabe señalar que -a los efectos de analizar la procedencia de la tutela solicitada- corresponde el estudio de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 2145 y por el Código ritual local (de aplicación supletoria en virtud de lo normado en el artículo 26 de dicha ley). El artículo 14

establece: “... son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: a. Verosimilitud del derecho. b. Peligro en la demora. c. No frustración del interés público. d. Contracautela.”

A su vez, el tipo de medidas como la solicitada en el escrito de inicio, son de contenido positivo y se encuentran comprendidas en el artículo 177 del código de rito local en cuanto establece que “*Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (2do. párr.)...aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida (1er. Párr.)*”

Ello así, cabe recordar respecto al concepto de este tipo de medidas que “... es una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado (...), ordenando –sin que concurra sentencia firme de mérito- que alguien haga o deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente” (Conf. Peirano, Jorge W., “Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, 3ª. ed. actualizada, Zeus, 1997, Pág. 97).

En relación con las exigencias para la procedencia de esta clase de medidas, cabe efectuar las siguientes precisiones. Respecto del presupuesto de verosimilitud del derecho, cabe afirmar que este recaudo es materia susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculado.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que “*como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad*” (Fallos: 323:349, 306:2060, 326:4572, 330:1915, entre otros). Es decir, que solo es necesaria la “apariencia de buen derecho”.

Este requisito expresamente mencionado en la ley de amparo (art. 14), como necesario para el otorgamiento de toda medida cautelar, supone la manifestación de conductas tendientes a crear convicción en el juzgador sobre la plausibilidad jurídica del planteo (arts. 178, 2do. párr. y 180 del CCAyT).

En este orden de ideas, corresponde tener presente que el derecho a la vivienda tiene rango constitucional nacional (art. 14 bis) y local (art. 17, 20 y 31). Además ha sido receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22). A lo que debe agregarse que en el presente caso, la cuestión involucra a niños, respecto a quien resultan operativas las previsiones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (también con jerarquía constitucional), en especial lo regulado en el art. 27.

Asimismo, no deben olvidarse las siguientes prescripciones contenidas en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: art. 10º, en cuanto establece que “*Los*

*derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede limitarlos.”; art. 17º, al disponer que la Ciudad “Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas...”; art. 21 y art. 31º, en cuanto se reconoce el derecho a una vivienda digna, contemplando la resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica...(inc. 1).*

A todo ello debe añadirse que en el caso de autos, la actora expone que ha sufrido episodios de violencia de género por parte el padre de sus hijo/as y, posteriormente, por su última pareja los que motivaron las pertinentes denuncias que fueron reseñadas precedentemente, estos hechos han acentuado su situación de vulnerabilidad, lo que sin duda modificó inexorablemente su forma de vida. Que este contexto de desprotección exige la correspondiente aplicación de la normativa vigente, para lo cual haré un detallado análisis del derecho aplicable en la especie: en primer lugar evocaré la obligación en cabeza de todos los jueces de realizar el correspondiente control de convencionalidad de las normas internacionales tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias (Corte IDH, caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia 18.11.2010, Corte IDH “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (Aguado Alfano y otros)”, sentencia 24.11.2006), no perdiendo de vista que en la última reforma constitucional por medio del bloque de constitucionalidad federal se ha otorgado supremacía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos –artículo 75 inciso 22 CN-, entre los cuales se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” la que ha sido aprobada por la República Argentina mediante Ley N° 24.632, sancionada el 13 de marzo de 1996. Esta Convención en su artículo 8 establece que: “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; (...) f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social”. La implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) - <http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp>-, el mismo se encarga de analizar los avances en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas Estatales ante la violencia contra las mujeres. En el último informe sobre la Implementación de la convención de Belem Do Pará, el Comité de Expertas/os “vio con satisfacción el esfuerzo realizado para armonizar la legislación e incorporar los elementos de la definición de violencia contra las mujeres de la Convención, especialmente como el pilar de las leyes integrales de violencia. Hasta la fecha México (2007), Venezuela (2007), Guatemala (2008), Colombia (2009), Argentina (2009) y El Salvador (2010) cuentan con estas leyes, (...)” (Segundo Informe

Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará, Abril 2012). En el ámbito Nacional la Ley de Protección Integral a las Mujeres[1] (ley 26.485, Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009), en su artículo 2º entre sus objetivos establece: “(...) b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; y (...) f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia”.

Asimismo en la ciudad la Constitución local establece en su artículo 38 que: “[l]a Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres. Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la eliminación de la segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee a la prevención de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de atención; ampara a las víctimas de la explotación sexual y brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas”.

**VI.**El segundo presupuesto contemplado en la Ley N° 2145 es el peligro en la demora, que consiste en la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del paso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (conf. Palacio Lino “Derecho Procesal Civil”, Tª IV-B, pág. 34 y ss.; CN Cont. Adm. Fed., Sala IV in re “Azucarera Argentina – Ingenio Corona c/ Gobierno Nacional – Ministerio de Economía”, del 1/11/84; CN Civil, Sala E, in re “Tervasi Carlos A. y otros c/ Municipalidad de la Capital”, del 5/12/84). Es decir, que requieren que se acredite el peligro de un perjuicio irreparable (CN Cont. Adm. Fed. Sala III, in re “Decege SA c/ Estado Nacional s/ ordinario”, del 16/8/90). Al respecto, la Corte Suprema ha expresado que es necesario “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (11/7/96 “in re” Milano, Daniel c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” y en igual sentido Sala V CNFed.Cont.Adm. 3/3/97 y, en corcondantentemente CNFED Sala II, 19-08-99, LL 1999-E, 624 DJ, 1999-3-903).

**VII.** Con tales criterios de ponderación concluyo que los argumentos expuestos y la documental acompañada por la accionante, crean la suficiente convicción al suscripto respecto de tener por acreditado *prima facie* y en este estado larval del proceso, por un lado, el vínculo de las/el niñas/o con la actora (fs. 64, 66, 68 y 70), la situación económica y social en la que se encuentra (fs. 73, 76, 121, 119, 165/168), los padecimientos de salud de la Sra. T. (fs. 77, 79, 81, 101/103) y de las/el niñas/o (fs. 105, 107, 109, 112, 116), la nota presentada ante la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario con fecha 29/06/2018 por la cual la amparista solicita acceder al subsidio habitacional acorde a los valores de mercado u otra solución de vivienda (fs. 122) y los oficios allí dirigidos remitidos por la Defensoría del Pueblo (fs. 171/172 y fs. 175/176), copia de la demanda de desalojo por vencimiento de contrato y falta de pago del inmueble sito en Olivera 449 CABA (fs. 134/135) y la orden de entrega a la parte actora [M. M. L.] del inmueble sito en la calle Olivera 449 de la CABA en el marco de la causa “M. L. M. c/ A., J. A. y otro s/ desalojo por vencimiento de contrato” expediente n° 16704/2017 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 53 (fs. 136/137), certificado negativo de ANSES (fs. 121) y las constancias obrantes de las diferentes causas iniciadas por los hechos de violencia de género relatados y precedentemente reseñados (fs. 177/189, 198/236).

Especialmente, en este estado cabe advertir que la Sra. T. indicó que el inmueble en el cual habita con sus hijo/as fue alquilado por ella y el Sr. A.; que pagaban un alquiler de seis mil pesos, de los cuales la mitad era aportada por la amparista y la otra mitad por el Sr. A. (fs. 8vta); que como consecuencia de las lesiones físicas y el abuso sexual que este le infringió debió el Sr. A. abandonar el hogar a raíz de su exclusión por orden judicial de fecha 8 de febrero de 2017 y a partir de ello la situación económica de su hogar declinó abruptamente.

De las constancias de autos se desprende que la Sra. M. L. M. inicio juicio de desalojo por falta de pago y vencimiento de contrato con respecto a la locación del inmueble sito en Olivera 449 CABA. Se desprende de la copia de la presentación de fs. 134/135 que celebró con el demandado un contrato de locación el día 02/03/2015 con vencimiento el día 28/02/2017 y que promueve la demanda contra J. A. A.:, subinquilinos, y/u ocupantes que hubiere en ese inmueble. Que a fs. 227/228 obran copias de la resolución de prohibición de acercamiento del Sr. A. al domicilio sito en la Av. Olivera 449 PH, propiedad de adelante CABA y a la persona de la amparista y sus hijos en el marco de la causa n° 4144/2017 caratulada “T., M. P. c/ A. K. J. s/ Denuncia por violencia familiar” del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25. Conforme da cuenta la copia de la resolución de fs. 229, se dispuso la prórroga de dicha medida de prohibición de acercamiento sin límite temporal. A fs. 231/236 obra copia de requerimiento de elevación a juicio, de fecha 20/03/2018, en la causa n° 7610/2017 contra el Sr. A, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en concurso ideal con el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo (ver asimismo copia de carátula de fs. 230).

Es por ello que, en este estado limitar de la causa, tengo para mí que la emergencia habitacional en la que se encuentra la actora se encuentra íntimamente vinculada con los hechos de violencia que alega la amparista por lo cual el GCBA deberá incorporar a la parte actora a las prestaciones de un programa creado a los efectos de conjurar la inminente situación de calle y de emergencia que sufre con sus hijo/as, que de consistir en un subsidio deberá permitir abonar de forma íntegra el valor de uso de una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad y que preserve la unidad familiar.

Asimismo, se hace constar que tal solución no podrá consistir en el régimen de paradores y albergues.

En función de todo ello, considero que se encuentra acreditado el presupuesto de verosimilitud del derecho invocado en la demanda y el peligro en la demora en la medida exigida por el instituto en análisis.

Cabe recordar, finalmente, que el Alto Tribunal ha sostenido que “...la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. En caso contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada – a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción” (Fallos: 314:711, consid. 2do.; en igual sentido, Fallos: 306.2060, consids. 6to. y 7mo.).

**VIII.** En consecuencia, cabe concluir que las constancias aportadas a la causa hasta este momento son, *prima facie*, suficientes para generar convicción tanto de la verosimilitud del derecho, como del peligro en la demora invocada, encontrándose, por tanto, cumplidos los recaudos para la tutela provisional solicitada.

**IX.** En cuanto a la prestación de contracautela, cabe destacar que su razón de ser encuentra fundamento en el principio de igualdad, ya que tiene por finalidad asegurarle al demandado, frente al accionante, el resarcimiento por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia de haberse solicitado la traba de la medida sin derecho.

Ahora bien, en el caso debe también tenerse en cuenta que se encuentra en juego el derecho a la vivienda y que la Constitución de la Ciudad garantiza que el acceso a la justicia no puede ser limitado por razones económicas (art.12, inc.6).

Por ello y dado que no advierto eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse del otorgamiento de la medida cautelar (art. 14 ley 2145), considero que la caución juratoria prestada a fs. 52vta. y 56 resulta una contracautela adecuada.

**X** Finalmente, cabe destacar que no advierto que la presente decisión pueda afectar de modo alguno el interés público. Ello, en la medida en que lo que se intenta resguardar es un derecho esencial de la parte actora junto a sus hijo/as menores de edad.

Máxime cuando el rechazo de la medida solicitada, es susceptible de acarrear consecuencias más dañosas que los eventuales perjuicios que su admisión podrían producirle a la demandada (art. 189 inc. 1 in fine CCAyT).

Por todo ello y dado que se encuentran reunidos los requisitos previstos por la ley, corresponde hacer lugar a la cautela pedida.

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que, en el plazo de dos (2) días de notificado, incorpore a la amparista **M. P. T. (DNI 23.086.429)** conjuntamente con su hijo S.D.V y sus hijas F.P.V, B.M.V. y A.P.V. a las prestaciones de un programa creado a los efectos de conjurar la inminente situación de calle y de emergencia que sufre el grupo familiar, hasta el dictado de la sentencia definitiva en la presente causa. De consistir dicha incorporación en un subsidio, el mismo le deberá permitir abonar en forma íntegra el valor de uso de una vivienda en condiciones de habitabilidad y que preserve la unidad familiar. En el mismo plazo deberá ser informado al juzgado el tipo de programa en que se efectuó la inclusión y sus condiciones.

2) En atención a lo manifestado a fs. 52vta. y 56, téngase por prestada la caución juratoria por parte de la accionante.

**Regístrese y notifíquese al amparista por Secretaría y al Ministerio Público Tutelar mediante la remisión de las actuaciones a su despacho.**

**Comuníquese lo aquí decidido a la demandada mediante cédula, a diligenciarse con carácter urgente y con copia íntegra de la presente y debiendo notificar en dicho acto el traslado de la demanda ordenado a fs. 271. Hágase saber que la confección de dicha notificación queda a cargo de la parte actora.**